

Colombia desde Perú

Por Eduardo Toche. Historiador, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Perú.

etoche@desco.org.pe

La operación militar que terminó con la vida de alias Raúl Reyes, evidenció que la hora de los “duros” ha vuelto a sonar con gran intensidad en la subregión andina. A semejanza de lo que aconteció en las décadas pasadas, los pretextos corren por el lado de las amenazas a la seguridad, sólo posibles de ser controladas con el empleo de medios militares. A diferencia de lo ocurrido años atrás, los interesados en despojar de los corsés a los conflictos que subyacen de manera localizada para tratar de expandirlos hacia otros espacios, parecen considerar que es el momento oportuno para la obtención de sus objetivos. Es un conflicto que tiene varios niveles que, a su vez, entretujan sus componentes en un entramado denso y sumamente complejo. Aún así, los actores comprometidos sí saben para quiénes trabajan. Al menos, los más destacados. Entre ellos, el presidente peruano Alan García.

Vecindad complicada

Los efectos, supuestos o no, que el conflicto interno de Colombia provoca en el Perú son de larga data. Se recordará las sospechas, siempre presentes, que se tuvo respecto a las vinculaciones del MRTA con el M-19, que se reforzaron cuando el ejército colombiano desarticuló un denominado Batallón América en 1986. Entre los cadáveres de los integrantes de este contingente estuvieron tres peruanos que, en efecto, pertenecían al grupo subversivo peruano.

...las vías marítimas son parte del circuito utilizado por los grupos mexicanos, cuya creciente presencia se debió al nicho dejado por los carteles de Cali y Medellín, luego de su desestructuración...

Posteriormente, tuvimos la fuerte relación entre los carteles colombianos de la droga y los productores peruanos, muy golpeada luego de la implementación de la política de interdicción ejecutada por el gobierno de Clinton a mediados de los años 90 que tuvo, entre otros efectos, la reconversión de las rutas en tanto dejó de utilizarse la vía aérea y empezó a usarse cada vez con mayor intensidad las rutas marítimas y fluviales.

Actualmente, las primeras –las vías marítimas– son parte del circuito utilizado por los grupos mexicanos, cuya creciente presencia se debió al nicho dejado por los carteles de Cali y Medellín, luego de su desestructuración. Las segundas son las que transitan los colombianos actualmente, originando nuevas configuraciones en el uso

de los territorios. Con ese giro en el circuito de la cocaína, la región del Putumayo¹, en el que confluye una enmarañada red fluvial casi imposible de ser controlada, empezó a ser nuevamente referida en los discursos y documentos oficiales.

Inhóspita y ajena, la frontera con Colombia es un territorio habitualmente considerado "salvaje" por el Estado peruano y sólo la ocasional extracción de recursos genera cierto interés sobre este espacio. A inicios del siglo XX fue el caucho y hacia finales de ese siglo fue la droga, en este último caso como una zona de tránsito y transacción y no de producción, como lo fue el primero.

Rápidamente, en este contexto, los medios de comunicación peruanos dirigieron su interés hacia el Putumayo, aprovechando la confusión que generaba el término "narcoterrorista", empleado para persuadir a la población de que la estrategia llamada a combatir las principales amenazas a la seguridad debía ser una sola, en tanto el enemigo también lo era más allá, según esta versión, de las diferencias que aparentaban.

**...el declive visto a mediados de la
década de los noventa no se debía a la
idoneidad de la política antinarcóticos,
sino a la sobreoferta existente
en el mercado mundial...**

Mientras tanto, ¿qué había sucedido? Desde 1999 los precios de la cocaína iniciaron una nueva fase ascendente y, con ello, surgieron nuevas preocupaciones en Washington. Ahora se tenía la certeza de que el declive visto a mediados de la década no se debía a la idoneidad de la política antinarcóticos, sino a la sobreoferta existente en el mercado mundial, de manera tal que cuando la demanda aumentó al abrirse nuevos centros de consumo, el circuito volvió a animarse. Asimismo, esta evolución de los precios reveló el fenómeno "globo" o "mercurio", es decir, que cuando se reprimía una zona, el narcotráfico se desplazaba a otros lugares menos controlados. Así, los golpes propinados en Colombia abrieron nuevas oportunidades en Perú y, en menor medida, en Bolivia.

Aún más, este fracaso se reveló justo cuando los Estados Unidos estaban obligados a reubicar su tradicional centro de monitoreo hemisférico, asentado en Panamá, al tener que cumplir con los tratados firmados con el presidente Omar Torrijos años antes. De otro lado, esto coincidió con un periodo electoral en el país del norte, donde la mayoría republicana en el Congreso encontró en estos pobres resultados de la política antinarcóticos, un buen motivo para criticar al gobierno demócrata y exigirle respuestas más contundentes ante un problema que, desde su perspectiva, había dejado de ser específicamente colombiano para adquirir connotaciones regionales.

Fujimori: alineamientos y corrupción

Esta última posición fue adquiriendo fuerza, por lo que las autoridades norteamericanas empezaron a tejer compromisos para una eventual alianza con los gobernantes latinoamericanos ante la posibilidad de la expansión del problema colombiano. Aunque hallaron pronta respuesta en el presidente argentino Carlos Saúl Menem y en el peruano Alberto Fujimori, la dificultad radicaba en el

¹ Perú y Colombia comparten una frontera de 1.626 kilómetros separada de modo natural por el río Putumayo, en un área con poca población donde en los últimos años han aumentado los cultivos de hoja de coca, principal componente de la cocaína.

recientemente elegido presidente venezolano Hugo Chávez, quien había manifestado su conformidad en conversar con los dirigentes de las guerrillas colombianas, ofreciendo a su país como sede de una conferencia latinoamericana que contemplara una salida pacífica.

Entonces fue este el momento, en el último tramo de la década de los 90, en que los diarios y programas de televisión alineados con la posición oficial fujimorista -es decir, casi todos los considerados importantes y de alcance nacional- empezaron a interesarse en las actividades de las Farc. Al parecer, eran reacios a investigar sobre el intenso trajín que se realizaba alrededor de la cocaína en el Putumayo buscando en su lugar un indicio, por remoto que fuese, para sobredimensionar una supuesta presencia de las Farc en territorio peruano.

Esto se acrecentó cuando el gobierno del presidente Andrés Pastrana decidió conformar un campo de despeje e iniciar negociaciones con este grupo alzado en armas. Fue la ocasión para que el ahora enjuiciado ex presidente Fujimori revelara sus posiciones respecto a este tema. Crítico pertinaz y excesivo de su par colombiano, Fujimori no perdió ocasión para pontificar que la única manera de aspirar ganarle la guerra a los grupos subversivos era no darles concesiones, tal como lo había hecho en Perú. En un extremo de soberbia, se atrevió incluso a sugerir a los colombianos que podía "prestar" a su asesor Vladimiro Montesinos para que les enseñara cómo hacer las cosas.

Así, el 4 de febrero de 1999, en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, el presidente Fujimori calificó la situación colombiana como un problema regional y criticó la actitud dialogante de su colega colombiano. Al llegar a Lima, dispuso la movilización de tropas hacia la frontera arguyendo una posible infiltración de la "narcoguerrilla" colombiana, sin responder a la denuncia planteada por el diario colombiano El Espectador, respecto de la existencia de una base norteamericana en el puerto fluvial amazónico de Iquitos.

Esta conducta fue entendida como inscrita en la expectativa del presidente Fujimori de presentarse a una tercera e inconstitucional elección para el año 2000. Ante las crecientes resistencias internas que estaba generando esta posibilidad, consideró que sería oportuno poner de su lado al menos a un sector importante de la administración norteamericana, los "halcones". De alguna manera, esta necesidad política circunstancial y específica quedó demostrada cuando ninguna política pública importante aplicada en la zona declarada en alerta, acompañó la determinación de militarizarla.

Mientras países como Ecuador presentaban a la comunidad internacional un proyecto denominado "Unidad de Desarrollo de la Frontera Norte" para prevenir cualquier impacto negativo de la aplicación del "Plan Colombia", el Perú sólo tenía entonces el Plan Binacional del Putumayo, elaborado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INADE), cuyo presupuesto anual era de unos 12 millones de soles -aproximadamente 3.5 millones de dólares-.

...Fujimori no perdió ocasión para pontificar que la única manera de aspirar ganarle la guerra a los grupo subversivos era no darles concesiones, tal como lo había hecho en Perú...

Como se sabe, el desenlace de los hechos fue muy diferente a las insinuaciones fujimoristas. Montesinos, autorizado por Fujimori, vendió 10 mil fusiles "Kalashnikov" AK-47 a las Farc, adquiridos mediante una "compra encubierta" del

Gobierno peruano en 1999. Una denuncia proveniente desde Bogotá, obligó a los socios Fujimori-Montesinos a exponer ante los medios de prensa un argumento que por inconsistente sólo despertó crecientes sospechas.

Pero esto no es lo más importante. Aunque falta aún mucho por saber qué fue lo que realmente aconteció, es razonable pensar que esta operación no podía ser concebida sin el conocimiento de sectores interesados en sabotear las negociaciones que impulsaba Pastrana en ese momento. Asimismo, era un tipo de decisión que por lo delicado no podía pasar desapercibida para los servicios de inteligencia, especialmente el estadounidense. Lo cierto es que este acontecimiento precipitó la caída de Fujimori, luego de que recibiera fuertes presiones para que apartara a Montesinos de su entorno. Desde ese momento, las versiones que hablaban de frecuente incursiones de integrantes de las Farc amenguaron para reaparecer poco tiempo después.

Los tiempos recientes

En marzo del 2002 en una conferencia de prensa conjunta en Washington con los presidentes Toledo y Bush, este último afirmó que ambos habían conversado detenidamente sobre la posible presencia de las Farc en Perú y que consideraba que el primero de ellos había hecho un buen trabajo al respecto. Agregó que Perú estaba movilizando tropas y tomando medidas para prevenir estas incursiones, y que Estados Unidos apoyaría estas acciones.

A su vez, el presidente Toledo subrayó la inexistencia de pruebas sobre operaciones de las Farc en su país, aunque se estaban adoptando medidas preventivas. Agregó que Perú había empezado a desplazar guarniciones emplazadas en la frontera con Ecuador hacia la frontera con Colombia. Más aun, meses después, en setiembre del año 2002, ante los intensos e infundados rumores de que Colombia había sugerido la formación de una fuerza multinacional para combatir a las Farc y, para el caso, había realizado consultas con Perú, el Gobierno de Toledo debió negar dicha posibilidad, agregando que no había indicios ciertos sobre lo que venía afirmándose.

Ésta fue la tónica general durante los últimos tiempos, al menos hasta el 2006. A fines de ese año, el gobierno de Alan García decide poner en práctica "su estrategia antinarcóticos", materializada en planes de desarrollos aplicados a las cuencas cocaleras. De esta manera, la experiencia piloto se lleva a cabo en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), localizado entre las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín y Apurímac, en la parte central del país convertida, en la actualidad, en el principal productor nacional de cocaína.

Sin embargo, lo que apareció como una acción para amenguar las deplorables condiciones sociales de estas zonas intentando reconvertir los cultivos de coca, no pudo ocultar su esencia fundamentalmente militar, aunque eso no pareció preocupar demasiado al gobierno de García, procediendo a hacer lo mismo en las regiones del Huallaga, Costa Norte y Putumayo.

Sobre ninguno de estos planes existe información suficiente, pero alguna relación podría existir entre el Plan Putumayo y el hecho de que un mes antes de su implementación el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, haya manifestado su preocupación a su homólogo peruano, Allan Wagner, sobre actividades de las Farc en espacio peruano. Al respecto, esto podría haber sido una copia, algo corregida y aumentada, de lo que venía sucediendo desde años atrás. Pero la novedad estriba en que estas denuncias provienen ahora del Gobierno

colombiano, algo que no sucedía antes. En todo caso, la respuesta peruana sigue siendo la misma, es decir, estima que no hay pruebas de esta presencia.

El Gobierno peruano no tiene nada definido en materia de Derechos Humanos... Tampoco tiene definiciones claras sobre políticas transfronterizas que involucre y beneficie a la población que habita estos espacios...

Eso no significa que ante estas alertas el Gobierno peruano haya estado inactivo. Por el contrario, este factor y otros como la hipotética influencia que tendría el gobierno de Hugo Chávez a través de las llamadas Casas de ALBA instaladas en territorio peruano, vienen siendo utilizados para legitimar un ambiente represivo en momentos en que las protestas sociales, especialmente las que se focalizan en problemas medio ambientales, mantienen una alta probabilidad de desencadenarse de manera violenta.

Entonces, si bien García no apareció totalmente alineado con el presidente Uribe al desencadenarse la crisis entre Colombia y Ecuador a pesar de considerársele su aliado, esta actitud no significa distanciamiento alguno entre ambos mandatarios. Aunque García no está llano a aceptar de buenas a primeras una posible internacionalización del conflicto interno colombiano, a pesar de las presiones en contrario que recibe tanto interna como externamente, es obvio que el presidente peruano lo maneja en función a sus necesidades de política interna. Al menos por ahora.

En ese sentido, pueden notarse obvias diferencias entre García y la conducta de otros presidentes peruanos, especialmente Alberto Fujimori. Pero llama la atención que su posición involucre aparentemente sólo aspectos coyunturales y muy específicos, sin que evidencie sus pareceres sobre los elementos de fondo del problema. En efecto, el Gobierno peruano no tiene nada definido en materia de Derechos Humanos y, por ende, le resulta imposible emitir opinión respecto a cómo debiera comportarse Perú en cuestiones tales como el Acuerdo Humanitario. Tampoco tiene definiciones claras sobre políticas transfronterizas que involucre y beneficie a la población que habita estos espacios. Asimismo, carece de lineamientos estratégicos para la región amazónica y los recursos que ésta posee.

Decimos aparentemente porque, desgraciadamente, no puede saberse qué es lo que tiene en mente el presidente García ni cómo va a reaccionar ante las circunstancias, algo facilitado por la ausencia flagrante de una oposición política que debió servir de control y estar muy vigilante ante el accionar del gobernante.